

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 29º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-12214-2019
CARATULADO : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO
BARNECHEA/JUGUETES Y REGALOS KINDERTOYS LIMITADA

Santiago, trece de Abril de dos mil veinte

VISTOS.

Respecto la demanda ejecutiva: En folio 1 y con fecha 8 de abril de 2019, comparece don Boris Alberto Durandeu Stegmann, abogado de la Dirección Jurídica de la **Municipalidad de Lo Barnechea**, en representación judicial de dicha Municipalidad, que es representada legalmente por su Alcalde don Luis Felipe Guevara Stephens, profesor, todos con domicilio en Avenida Las Condes 14.891, Lo Barnechea, Santiago, quien interpuso demanda ejecutiva de cobro de patente comercial y derechos municipales en contra de **Juguetes y Regalos Kindertoys Limitada**, representada por don Pablo Hernan Rochet Araujo, ignora profesión u oficio, domiciliado en Avenida La Dehesa 1445, local 1056, Lo Barnechea, solicitando se despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra por la suma de \$ 3.148.996, más reajustes, intereses e interés penal del 1,5% mensual por cada mes o fracción de mes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales en relación con los artículos 53, 54, y 55 del Código Tributario, hasta hacerse entero y cumplido pago a su representada de lo adeudado, con costas.

Funda su acción en que el demandado y contribuyente adeuda a la Municipalidad de Lo Barnechea el pago por concepto de Patente Comercial y Derechos Municipales por los periodos que a continuación se singularizan en el Certificado Número 76 que emitió el Secretario Municipal:

Vencimiento	Monto
31/07/2006	\$59.092
31/01/2007	\$41.164
31/07/2007	\$68.071
31/01/2008	\$49.204
31/07/2008	\$95.739
31/01/2009	\$72.255
31/07/2009	\$146.843
31/01/2010	\$95.472



Foja: 1

31/07/2010	\$213.358
31/01/2011	\$131.022
31/07/2011	\$304.102
31/01/2012	\$67.317

Indica que conforme lo dispone el artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales, Decreto Ley 3.063 de 1979, el certificado citado que emite el Secretario Municipal, en los que consta la deuda del contribuyente tiene mérito ejecutivo, conforme a lo expresado en el artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales en relación a lo señalado en el artículo 438 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, señala que la obligación es líquida, actualmente exigible y su acción no se encuentra prescrita.

Respecto de la notificación de la demanda: En folio 9, consta notificación personal de la demanda a don Pablo Hernán Rochet Araujo, en representación de Juguetes y Regalos Kindertoys Limitada, el día **6 de febrero de 2020**.

Respecto del requerimiento de pago: En folio 2 del cuaderno de apremio, consta el requerimiento de pago realizado a don Pablo Hernán Rochet Araujo, en representación de Juguetes y Regalos Kindertoys Limitada, el día 6 de febrero de 2020.

Respecto de las excepciones opuestas: En folio 10, en presentación de fecha 10 de febrero de 2020, compareció don Pablo Hernán Rochet Araujo, empresario, en representación de Juguetes y Regalos Kindertoys Limitada, del giro de su razón social, RUT N° 77.971.590-6, ambos con domicilio para estos efectos en calle catedral N° 1.009, oficina 2101, Santiago, oponiendo las siguientes excepciones, solicitando sean acogidas, y se niegue lugar a la ejecución impetrada, con expresa condena en costas.

1.- Excepción contenida en el N° 17 del Artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva.

Fundamenta su excepción en que de acuerdo al artículo 2.521 del Código Civil, las patentes municipales prescriben en el plazo de 3 años contados desde que se hicieron exigibles.

Colige de lo anterior, que aquellas patentes que vencieron desde el 31 de julio de 2006 hasta el 31 de enero de 2017, incluyendo también esta última, se encuentran irremediablemente prescritas.

2.- Excepción contenida en el N° 14 (sic) del Artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que el título tenga fuerza ejecutiva.

Manifiesta que para que nazca una obligación de pagar patente municipal es necesario que el contribuyente o sujeto activo, realice alguna actividad comercial en el territorio de dicha comuna, requisito – que asegura- no se cumple en el caso *sub-lite*, toda vez que como acreditará, su parte hizo abandono del Local N° 1.056 ubicado en Avenida La Dehesa 1.445, comuna de Lo Barnechea y cesó toda actividad mercantil o de



Foja: 1

cualquier otra índole, a inicio del año 2006, y por consiguiente, a partir de ese momento, no devengó ninguna obligación de patente municipal.

Agrega que con esta demanda se pretende un doble cobro, ya que luego que su parte restituyera el local, éste fue ocupado por la “multitienda Ripley”, quien lo explota hasta el día de hoy como parte de su entrada.

3.- Excepción contenida en el N° 14 del Artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la nulidad de la obligación.

Fundada en los mismos argumentos señalados a propósito de la excepción anterior, por cuanto al haber restituido el local el año 2006, carece de objeto y causa el pago de cualquier patente municipal.

Respecto del traslado a las excepciones opuestas: En folio 13, con fecha 13 de febrero de 2020, la parte ejecutante evacuó el traslado conferido respecto de las excepciones en los siguientes términos.

1. En cuando a la excepción contenida en el número 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, se allana a la excepción en orden a declarar la prescripción sólo respecto del ***cobro de patente municipal con vencimiento entre el 31 de julio de 2006 y el 31 de enero 2017***, solicitando se ordene continuar con la ejecución hasta hacer entero y cumplido pago a su representada de las patentes con vencimientos entre el 31 de julio de 2017 y el 31 de enero de 2019 ambas inclusive, con los reajustes e intereses establecidos en el artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales, con costas.

Agrega que las municipalidades están obligadas por mandato constitucional y legal a agotar los medios de cobro de toda clase de créditos que tengan a su favor, entre ellas las patentes municipales. Así lo dispone, entre otros, el artículo 66 del Decreto 2385 que fija texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, Sobre Rentas Municipales. En efecto, las Municipalidades no pueden renunciar al cobro de dichos tributos, aun cuando haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 2521 del Código Civil, salvo que haya una declaración judicial expresa de prescripción, sea en el control de admisibilidad que disponen los artículos 441 y 442 del Código de Procedimiento Civil, o por solicitud del ejecutado al oponer excepciones, como es el caso de autos. En este caso el acreedor no posee la facultad de disponer libremente de lo suyo, puesto que, acorde a los artículos 63 N° 8 y 14; y 65 inciso 4 N° 1 de la Constitución Política de la República, requieren un texto legal expreso que las autorice para remitir deudas, el que, salvo determinadas excepciones, que no son aplicables a este caso, no existe.

2. Respecto a la excepción prevista en el número 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, cita el artículo 47 del Decreto 2385 que fija texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, Sobre Rentas Municipales e indica que el certificado de deuda que sirve de título a la presente ejecución, fue confeccionado con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el referido artículo 47, sin que le falte ningún requisito o condición establecido en la ley para que tenga fuerza ejecutiva. En efecto, dicho certificado fue emitido por el Secretario Municipal y contiene los montos y vencimientos adeudados por concepto de patente municipal.



Foja: 1

Refiere que el certificado de deuda, como instrumento público y acto jurídico emanado de la autoridad administrativa municipal, gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, así lo dispone el artículo 3 inciso final de la Ley N° 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos. En este sentido, será de cargo de la demandada desvirtuar la presunción de legalidad antes referida.

Expresa que la circunstancia de haber cambiado su domicilio o ejercer actividades lucrativas en otra comuna distinta, no implica que la deuda correspondiente al período adeudado se encuentre saldada. Puesto que en ese caso, como contribuyente afecto al pago de patente comercial en la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea, tiene la obligación de dar aviso al departamento municipal respectivo y solicitar su desenrolamiento, lo que en estricto rigor implica acompañar de forma oportuna Certificado de No Deuda de patente comercial y la fotocopia de la patente pagada en ésta por el semestre en que se produjo el cambio, balances, determinaciones de capital propio y Formulario N° 22 de Declaración de Impuesto a la Renta correspondiente. Lo cual no acredita la ejecutada.

Agrega que lo anterior se ve refrendado en el artículo 29 de la Ley de Rentas municipales que en su inciso final indica: *Asimismo, los contribuyentes, con excepción de los señalados en el artículo 32, que cambien de domicilio su casa matriz o sucursal, pagarán la respectiva patente comercial en la municipalidad correspondiente al nuevo domicilio, a contar del semestre siguiente al de su instalación. Para tal efecto, deberán comunicar dicha situación a la municipalidad del nuevo domicilio, dentro de los 30 días corridos siguientes al de la instalación, exhibiendo la patente pagada en la municipalidad de origen por el período semestral respectivo y un certificado emitido por la misma, en donde conste que no mantiene deuda pendiente por este concepto. En el caso de existir deuda, no se otorgará patente definitiva o provisoria, mientras no se regularice dicha situación ante la municipalidad respectiva.* Asegura que referente a esta normativa, la parte demanda no hace referencia alguna y no acredita tampoco la existencia dicha documentación.

Hace presente que dicha incorporación del inciso final del artículo 29, llevado a cabo conforme a La ley 20.033 del año 2005, se efectuó específicamente para evitar que existan contribuyentes que no cumplan su obligación tributaria pendiente con motivo de cambiarse de domicilio de una comuna a otra, y todo ello en vista de una razón aún más de fondo contenida en la misma historia de la ley, en relación al mensaje del Presidente de la República, que al expresar los fundamentos de su iniciativa, en cuanto al proyecto de ley que modificaría la ley de Rentas Municipales, eran en virtud de la necesidad de incrementar los recursos económicos de los municipios, *atendida la relevancia que hoy detentan las municipalidades en la determinación de la vida cotidiana y las condiciones para una mejor calidad de vida de chilenos y chilenas. Ello es consecuencia, por una parte, de sus múltiples funciones privativas y compartidas con otros organismos de la Administración Estatal, que las hace responsables de la educación del 60% de los niños chilenos y de la atención de salud primaria de aproximadamente el 50% de la población. Por otra parte, es consecuencia de que son el único ente público presente en las 342 comunas del país y de que manejan importantes subsidios sociales.*



Foja: 1

Afirma la circunstancia de ejercer actividades lucrativas en otra comuna distinta de Lo Barnechea, no implica que la deuda correspondiente al período adeudado no proceda, es más, por ejemplo, perfectamente puede estar ejerciendo una sociedad actividades lucrativas en otras comunas en virtud de las sucursales que posea, así el artículo 25 de la Ley de Rentas Municipales en su inciso primero indica: *“En los casos de contribuyentes que tengan sucursales, oficinas, establecimientos, locales u otras unidades de gestión empresarial, cualquiera que sea su naturaleza jurídica o importancia económica, el monto total de la patente que grava al contribuyente será pagado proporcionalmente por cada una de las unidades antedichas, considerando el número de trabajadores que laboran en cada una de ellas, cualquiera sea su condición o forma, incluidos los trabajadores de temporada y los correspondientes a empresas subcontratistas, en la proporción que corresponda pudiendo considerar, además, otros factores que aseguren una distribución equitativa, todo lo cual será determinado por el reglamento que al efecto se dicte.”*

Y a su vez el artículo 24 de la ley antes indicada en su inciso final establece un derecho a los contribuyentes que tenga invertido otros negocios o empresas afectas al pago de patente municipal en otras comunas distintas, de esta forma: *“En la determinación del capital propio a que se refiere el inciso segundo de este artículo, los contribuyentes podrán deducir aquella parte del mismo que se encuentre invertida en otros negocios o empresas afectos al pago de patente municipal, lo que deberá acreditarse mediante certificado extendido por la o las municipalidades correspondientes a las comunas en que dichos negocios o empresas se encuentran ubicados. El Presidente de la República reglamentará la aplicación de este inciso.”*

Reitera que la parte demandada no acompaña antecedente alguno respecto a sus argumentos. De lo anterior, concluye que en ningún caso la obligación carece de mérito ejecutivo.

3. En lo referente a la excepción observada en el número 14 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esgrime que no se ha fundamentado el vicio de nulidad por la que solicita se declare la invalidez de la obligación, solo basta hacer énfasis en que las alegaciones con las que la demandada intenta fundamentar ésta excepción, las que son más propiamente tal de materia de un procedimiento declarativo de lato conocimiento y no uno ejecutivo como el de autos.

Sostiene que la municipalidad debe ajustar su actuar a la Constitución y las Leyes el acto administrativo (como lo es el certificado que sirve de base para el presente procedimiento), es plenamente válido, se ajusta la ley, y por lo tanto se puede hacer exigible a sus destinatarios.

Alega que para ser aplicable esta excepción tiene que haber sido declarado la nulidad con anterioridad a este procedimiento, sea administrativamente o judicialmente, y pretender que sea este procedimiento de apremio que “lo declare”, escapa de la naturaleza de este. Cita el artículo 47 de la Ley de Rentas que establece que el Secretario Municipal acredita la deuda proveniente de patentes comerciales, derechos y tasas municipales en el certificado correspondiente. La Ley Orgánica de Municipales indica que el Secretario Municipal es el ministro de fe de todas las actuaciones municipales. Además, la Ley que Establece Bases de los



Foja: 1

Procedimientos Administrativos que Rigen Los Actos de los Órganos de la Administración del Estado claramente señala que los actos administrativos existen, se ajustan a la legalidad, y son exigibles a sus destinatarios (artículo 3 de la Ley 19.880).

Explica que para la doctrina, en especial José Quezada Meléndez, y la legislación, el título ejecutivo como documento solemne y público, que constata fehacientemente una obligación, y por ello, autoriza su ejecución. La Ley es la encargada de establecer cuáles son las formalidades que debe seguirse para que el documento tenga el carácter de título ejecutivo. El artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales (DL. 3063 de 1979), establece que *“tendrá mérito ejecutivo el certificado que acredite la deuda emitida por el secretario municipal”*. Es decir, el documento que certifique la deuda, y que sea firmado por el Secretario Municipal, tendrá por el sólo ministerio de la ley el carácter de título ejecutivo. Según lo señalado en el artículo 1.699 del Código Civil, los certificados de deuda por concepto de patente comerciales son Instrumentos Públicos, y como tales son válidos, salvo declaración en contrario, pero para ello debe ser señalado por un tribunal en un procedimiento declarativo con antelación, o por la misma autoridad que lo emitió. La declaración de nulidad escapa de este procedimiento, y es por eso que la ley franquea otros procedimientos.

Expone que de nuestro sistema legal, se puede desprender que se sustenta la anulabilidad de los actos administrativos, y no la nulidad de ellos. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito del Derecho Civil, donde predomina la autonomía de la voluntad, en el Derecho Administrativo, los actos de la administración se deben ajustar al principio de legalidad, es por ello que la ley le otorga el reconocimiento de que así se ha actuado, y por ende, este acto puede ser exigible a sus destinatarios. En el ámbito del Derecho Civil, los actos de los particulares tienen como limitación lo que no sea contrario a las leyes, y es por ello que las sanciones son diferentes según la norma que se haya infraccionado. En el Derecho Civil se contempla como sanción la nulidad, y según sea puede ser relativa o absoluta, no ocurre de igual forma con el Derecho Administrativo, que su sanción es la anulabilidad del acto, porque se ha infraccionado las normas, cuando su actuar debería haberse siempre ajustado a lo presupuestado en la Constitución y las leyes que regulan la actividad administrativa, y salvo que se demuestre lo contrario el acto es plenamente válido.

Razona que conforme se indica en la Ley que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (inciso final artículo 3 de la Ley 19.880), reconoce que el acto es válido, y mientras no haya declaración en contrario mantiene dicha calidad. Pensar lo contrario, y esperar que en un juicio ejecutivo se declare la nulidad del presente acto, implica que se desnaturaliza el presente procedimiento de apremio, convirtiéndolo en un declarativo, porque establecería una nueva situación jurídica, anulando el acto administrativo, lo cual no se encuentra contemplado para el presente procedimiento. Todo lo anterior se encuentra reforzado en el hecho que el procedimiento establecido en la Ley de Rentas Municipales señala del Cobro Judicial (Título IX), y no su declaración, además de remitir al juicio ejecutivo reglado en el Código de Procedimiento Civil.

Concordando con lo anteriormente señalado, el título ejecutivo es plenamente válido y da cuenta de una obligación que es válida, ya que se



Foja: 1

ha realizado conforme a la normativa atinente, y por los funcionarios municipales facultados para ellos. El artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales (DL 3063 de 1979), señala que basta que el secretario municipal consigne en el certificado la deudas para que esté confeccionado el título ejecutivo a favor de la Municipalidad, y la deuda manifestada será aquella que ley ha gravado con algún impuesto establecido en dicha Ley, haciendo cumplimiento del mandato legal y constitucional. La jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República señala que son las municipalidades, con los antecedentes que le sean aportados por los organismos fiscalizadores y del propio contribuyente, quienes determinarán si se encuentran gravados por este impuesto (Dictamen 21692 de 2011), por lo que la publicidad de los actos está determinada porque es el mismo contribuyente quien aporta los datos necesarios, y si debe impugnarlos, existe un procedimiento que así lo manifiesta.

Añade que el Servicio de Impuestos Internos tiene el imperativo legal de informar a las municipalidades correspondientes, las sociedades lucrativas, de acuerdo a los requisitos de la ley, hayan registrado su domicilio en dicho servicio. Así, la Municipalidad con los antecedentes que el mismo contribuyente aporta al Servicio de Impuesto Internos, procede a realizar el giro correspondiente, al verificar que se realizan las actividades que se encuentran gravadas por la ley.

Finaliza, reiterando los argumentos expuestos en la excepción anterior.

Respecto de la sentencia interlocutoria de prueba: En folio 14, mediante resolución de fecha 18 de febrero de 2020, se declararon admisibles las excepciones opuestas, recibándose la causa a prueba y fijándose los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales debía recaer la misma: 1.- Efectividad de faltar requisitos o condiciones establecidos por la Ley para que el título tenga fuerza ejecutiva,; Hechos, naturaleza y circunstancias; 2.- Efectividad de ser nula la obligación, Hechos y circunstancias. 3.- Efectividad de darse los presupuestos para que opere la prescripción alegada.

Respecto a la citación de las partes a oír sentencia: En folio 19, mediante resolución de fecha 2 de abril de 2020, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, compareció don Boris Alberto Durandean Stegmann, abogado de la Dirección Jurídica de la **Municipalidad de Lo Barnechea**, en representación judicial de dicha Municipalidad, que es representada legalmente por su Alcalde don Luis Felipe Guevara Stephens, quien interpuso demanda ejecutiva de cobro de patente comercial y derechos municipales de conformidad con el **Certificado Número 76/2019** que emitió el Secretario Municipal de Lo Barnechea, en contra de **Juguetes y Regalos Kindertoys Limitada**, representada por don Pablo Hernan Rochet Araujo, solicitando se despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra por la suma de \$ 3.148.996, más reajustes, intereses e interés penal del 1,5% mensual por cada mes o fracción de mes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales en relación con los artículos 53, 54, y 55 del Código Tributario, hasta hacerse entero y cumplido pago a su representada de lo adeudado, con costas.



Foja: 1

SEGUNDO: Que compareció don Pablo Hernan Rochet Araujo, en representación de Juguetes y Regalos Kindertoys Limitada, quien opuso las excepciones previstas en los números 17, 7 y 14 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, ***la prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva; la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado; y la nulidad de la obligación;*** de acuerdo a los argumentos expuestos en la parte expositiva de esta sentencia.

TERCERO: Que, la parte ejecutante al momento de evacuar el traslado, se allanó parcialmente a la excepción contenida en el N° 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil únicamente sobre la prescripción respecto del ***cobro de patente municipal con vencimiento entre el 31 de julio de 2006 y el 31 de enero 2017*** y solicitó el rechazo de las excepciones previstas en los número 7 y 14 del mismo artículo y cuerpo legal citado, de acuerdo a los fundamentos indicados en la primera parte de esta sentencia.

CUARTO: Que la parte ejecutante para acreditar sus dichos, aparejó al proceso la siguiente prueba instrumental:

1.- Certificado de Acreditación de Deuda para Cobranza Judicial N° 76/2019, emitido el 20 de marzo de 2019 por la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea, en el que se indica que el monto de la deuda de Juguetes y Regalos Kindertoys Limitada, R.U.T. N° 77.971.590-6, representada legalmente por don Pablo Hernán Rochet Araujo, por concepto de patente comercial, al día 28 de febrero de 2019, asciende a la suma total de \$ 6.575.097. El documento se encuentra suscrito por doña Vivian Paola Barra Peñaloza, Secretaria Municipal de la Municipalidad de lo Barnechea.

Valoración.

Al documento descrito precedentemente, se le asignará el valor probatorio señalado en el 47 de la Ley sobre Rentas Municipales, en relación con el artículo 434 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo que se resuelva en la presente sentencia respecto de las excepciones opuestas por ser el documento fundante del libelo persecutor.

QUINTO: Que, la parte demandada no rindió prueba alguna que describir ni menos ponderar, por lo que la concurrencia o improcedencia de las excepciones se determinará en base al mérito del proceso y de los instrumentos acompañados por la demandante.

SEXTO: Que, conforme a lo expuesto, se ha establecido que la obligación que motiva el presente juicio, emana del Certificado de Deuda emitido por la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea, el cual fue valorado en el motivo cuarto anterior de este edicto, correspondiendo conforme a lo establecido en el artículo 1.698 del Código Civil, al ejecutado probar la procedencia y efectividad de los sustentos fácticos en que funda las excepciones opuestas, de modo que tiene la carga procesal de desvanecer la presunción de autenticidad y veracidad que el título invocado supone, conforme a la legislación vigente.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la excepción de prescripción opuesta, cabe indicar que, según lo dispuesto en el artículo 2.492 del Código Civil, la prescripción es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, por no



Foja: 1

haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales; y que por su parte, el artículo siguiente, nos indica que quien quiera aprovecharse de este modo de extinguir, debe alegarla. Luego y sobre el particular, el artículo 2.521 del Código Civil establece el plazo de tres años para la prescripción de las acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades, provenientes de todo tipo de impuestos.

OCTAVO: Que, en otro orden de ideas, a través de la interrupción de la prescripción se pierde todo el tiempo que ha obrado a favor del deudor, momento a partir del cual comienza un nuevo cómputo para el plazo de tres años que exige el artículo 2.521 ya citado, para la prescripción de la acción ejercida en la causa. Opera la interrupción civil desde el momento en que interviene requerimiento judicial, esto es, desde la época en que se notifica válidamente la demanda al ejecutado.

NOVENO: Que de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales citadas en los motivos anteriores, todas las cuotas con vencimiento anteriores a tres años contados hacia atrás desde la fecha de notificación de la demanda, hecho acaecido con fecha 6 de febrero de 2020, se encontrarían prescritas.

Por consiguiente, ***esta excepción sólo corresponde aplicarla respecto de la cuota con vencimiento al 31 de julio de 2006 hasta la cuota con vencimiento al 31 enero de 2017, ambas inclusive***, prescribiendo su acción ejecutiva respecto de dicho periodo, siendo en consecuencia, exigibles todas las cuotas posteriores, por lo que en estricto rigor y conforme a las normas legales citadas, no cabe otra cosa que acoger parcialmente la excepción de prescripción opuesta por la parte ejecutada, por haber transcurrido el plazo para perseguir su pago, teniendo en consideración además, que la ejecutante al evacuar el traslado de la excepción en estudio, se allanó totalmente a la pretensión de la ejecutada.

DÉCIMO: Que, en relación a la excepción de **falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado**, esta sentenciadora ha manifestado reiteradamente que para ser exitosa la oposición de la misma, ella ha de sustentarse en situaciones fácticas que se orienten a mermar el valor o las propiedades del título ejecutivo, con el objeto de acreditar que aquél carece de la fuerza de la que, al menos, inicialmente aparece dotado, resultando, en consecuencia, absolutamente impertinentes las alegaciones que pretenden basar tal defensa en circunstancias que sean ajenas al instrumento en que el ejecutante respalda su acción y conforme al cual se instruyó el procedimiento ejecutivo propiamente tal.

Al respecto, el profesor Raúl Espinosa Fuentes, señala: "*Se opondrá esta excepción cada vez que falte alguno de los requisitos para que proceda la acción ejecutiva, sea porque el título no reúne todas las condiciones establecidas por la ley para que se le considere como ejecutivo, o porque no es actualmente exigible. Esta excepción debe relacionarse, pues, con todos aquellos preceptos legales que consagran exigencias para que un título tenga fuerza ejecutiva. Estos preceptos legales, como se comprenderá, son innumerables, dada la diversidad de títulos ejecutivos que la ley crea, como también la diversidad de condiciones*



Foja: 1

que establece para cada uno de ellos". (Raúl Espinosa Fuentes, "Manual de Procedimiento Civil. El Juicio Ejecutivo", Edición actualizada por Cristian Maturana Miquel, Editorial Jurídica, 2003, págs. 113 y 114).

UNDÉCIMO: Que en lo atinente al fundamento de la defensa de la parte ejecutada, la misma no tiene por finalidad desvirtuar el valor que la ley le ha otorgado al certificado de deuda, sino controvertir su mérito en base al hecho de que la obligación no sería exigible por haberse cambiado de domicilio el contribuyente.

Así, habiéndose pronunciado esta sentenciadora acogiendo la prescripción parcial de la obligación contenida en el certificado que sirve de título a la presente ejecución, solo resta pronunciarse sobre el mérito de la presente excepción en relación a las patentes comerciales vigentes o tributos no prescritos que constan del instrumento antes indicado y que consideran los periodos correspondientes a julio de 2017 a enero de 2019.

Al efecto, teniendo en consideración para ello que el título fundante de la ejecución posee una naturaleza jurídica indiscutible, toda vez que fue emitido con apego a las formalidades contenidas en los artículos 24 y 47 de la Ley de Rentas Municipales y en atención a dicha circunstancia se tendrá por establecido que dicho instrumento da cuenta de una obligación líquida, actualmente exigible y cuya acción de cobro no se encontraba prescrita.

En tal sentido el artículo 24 de la Ley sobre Rentas Municipales establece que corresponde al Servicio de Impuestos Internos informar a las Municipalidades en el mes de mayo de cada año y por medios electrónicos, el capital propio declarado, el rol único tributario y el código de la actividad económica de cada uno de los contribuyentes, de manera que las declaraciones efectuadas por el Secretario Municipal y los datos de la patente que se cobra en autos, se obtuvo conforme a la información proporcionada por el organismo competente, esto es, el Servicio de Impuestos Internos, institución pública que a su vez lo obtiene mediante los datos aportados directamente por el propio contribuyente.

Luego, en cuanto al hecho de haberse cambiado de domicilio el demandado, tal circunstancia no lo exime de pleno derecho del pago de patente y derechos municipales, pues puede obedecer tal como lo prevé el artículo 25 del Decreto Ley N° 3.069 sobre Rentas Municipales, a que el contribuyente posea varios locales comerciales, sucursales, oficinas establecimiento u otra unidad de gestión empresarial, el monto total de la patente que grava al contribuyente, deberá ser pagado proporcionalmente por cada una de las unidades antedichas. Por lo anterior, es que no se puede suponer que el cambio de domicilio implique necesariamente el cierre del local por el cual se encuentra afecto en la comuna de Lo Barnechea.

Por otra parte, el artículo 29 del mismo cuerpo legal, aplicable en la especie, establece en su inciso final que, *"Asimismo, los contribuyentes, con excepción de los señalados en el artículo 32, que cambien de domicilio su*

casa matriz o sucursal, pagarán la respectiva patente comercial en la municipalidad correspondiente al nuevo domicilio, a contar del semestre siguiente al de su instalación. Para tal efecto, deberán comunicar dicha situación a la municipalidad del nuevo domicilio, dentro de los 30 días corridos siguientes al de la instalación, exhibiendo la patente pagada en la municipalidad de origen por el período semestral respectivo y un



Foja: 1

certificado emitido por la misma, en donde conste que no mantiene deuda pendiente por este concepto. En el caso de existir deuda, no se otorgará patente definitiva o provisoria, mientras no se regularice dicha situación ante la municipalidad respectiva." Del precepto transcrito se puede colegir meridianamente que el contribuyente se encuentra en la obligación de informar a la municipalidad en que se encontraba su local comercial, el cierre o el traslado del mismo a otra comuna para los efectos del pago de patente correspondiente. Es decir, es responsabilidad del demandado realizar todas las gestiones conducentes a que la Municipalidad tome conocimiento en el caso de cese de una actividad comercial afecta al pago de patente bajo su competencia y tal circunstancia no opera *ipso facto*, por el solo hecho de retirar, cerrar o cambiar el domicilio de un local comercial. En suma, el contribuyente, tal como lo señala la norma citada, solo quedará eximido del pago de patentes y derechos municipales correspondientes a la entidad encargada de su recaudación, una vez informado el cambio de domicilio, en el plazo y bajo condiciones ya referidos.

Finalmente, cabe considerar que a su respecto la parte ejecutada no rindió prueba alguna a fin de acreditar sus dichos, como era de su carga hacerlo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.698 del Código Civil, no contando el Tribunal con antecedentes en el proceso que ameriten su procedencia. Por lo anterior, este Tribunal rechazará la excepción opuesta.

DUODÉCIMO: Que, antes de analizar el fondo de la excepción opuesta relativa a la **nulidad impetrada**, es necesario referirse a la nulidad como sanción civil, por lo que conviene estar atento al concepto que nos brinda don Arturo Alessandri; *"Esta sanción es una verdadera pena, de índole civil y, como tal, debe estar expresamente establecida por la ley, siendo, por lo tanto, de derecho estricto; no hay pena sin una ley que la establezca expresamente y sus disposiciones deben ser interpretadas restrictivamente, no pudiendo aplicarse por analogía"*, del concepto transcrito, aparece claramente que la nulidad, está regida por el principio de legalidad, en razón de lo cual no puede existir nulidad sino está prevista en la ley.

DECIMOTERCERO: Que, aclarado el criterio que mantiene esta sentenciadora respecto de la excepción impetrada, es dable analizar el argumento por el cual el certificado de deuda de marras sería nulo, acorde a los expuesto por el ejecutado. En este sentido, el demandado sostiene la nulidad de la obligación en la falta de objeto y causa, al haber cambiado su domicilio.

Dicha excepción será igualmente desestimada, teniendo en consideración para ello todo lo razonado en el considerando precedente, al haber basado su argumento en la misma hipótesis planteada anteriormente; además de no haber rendido prueba alguna con el fin de acreditar sus asertos y no ser una causal de nulidad de la obligación tributaria el hecho puro y simple de cambiar de domicilio el contribuyente.

DECIMOCUARTO: Que, los demás antecedentes que obran en este procedimiento, en forma alguna alteran lo que se ha venido razonando.

DECIMOQUINTO: Que se condena en costas a la partes, en forma proporcional, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 471 del Código de Procedimiento Civil.



Foja: 1

Por estas consideraciones y vistos, además, el Decreto Ley N° 3.063 sobre Rentas Municipales, los artículos 139, 160, 170, 254, 341, 342 y siguientes, 434, 464, 471 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 1.698, 1.699, 1.700, 1.706, 2.492, 2.503, 2.514, 2.515, 2.518 y demás pertinentes del Código Civil se resuelve:

I. Que, se **acoge parcialmente la excepción** de prescripción opuesta, declarándose prescrita la acción ejecutiva de cobro de la cuota con vencimiento al 31 de julio de 2006 hasta la cuota con vencimiento al 31 de enero de 2017, ambas inclusive, ordenándose continuar con la ejecución por las sumas demandadas correspondientes a las cuotas vigentes, más reajustes e intereses en la forma y condiciones establecidas en los artículos 53, 54 y 55 del Código Tributario, hasta hacer a la ejecutante pago íntegro de lo adeudado.

II. Que se rechaza la excepción contenida en el número 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

III. Que se rechaza la excepción contenida en el número 14 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil

IV. Que cada parte asumirá el pago de las costas ocasionadas por el presente juicio en forma proporcional.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívense los autos.

PRONUNCIADA POR DOÑA MARÍA LAURA GJUROVIC MANRÍQUEZ, JUEZ SUPLENTE DEL VIGÉSIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, trece de Abril de dos mil veinte**



